

**NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.**, señalando como domicilio el indicado en el proemio de la presente demanda. El infrascrito [REDACTED] [REDACTED] promueve en nombre de la citada sociedad actora.

## II. RESOLUCIONES QUE SE IMPUGNAN

Se impugnan las siguientes resoluciones:

a) Oficio número 005/2019 de fecha 1º de abril de 2019, emitido por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Huixtla, Chiapas

b) Oficio número MHC/TES/06-A/2019 de fecha 13 de mayo de 2019, emitido por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Huixtla, Chiapas.

Se manifiesta que mi representada tuvo conocimiento de ambas resoluciones administrativas impugnadas el pasado **14 de mayo de 2019**, fecha en que le fueron notificadas vía correo electrónico, sin que tenga en su posesión el acta de notificación respectiva.

Cada una de las resoluciones antes detalladas se acompaña en copia simple como **ANEXO "2"** y **ANEXO "3"**, en el entendido que la autoridad no acompañó el original de los oficios al momento de notificar a mi poderdante, ilegalidad que se hará valer en líneas posteriores.

## III. AUTORIDADES DEMANDADAS

**C. TESORERO MUNICIPAL** el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Huixtla, Chiapas. (en lo sucesivo el Tesorero).

## IV. TERCERO INTERESADO

En el presente caso no se tiene conocimiento de existencia de algún tercero.

## V. PRETENSIÓN DEDUCIDA (LO QUE SE PIDE)

Que en términos del Artículo 159, Fracción II de la Ley de Procedimientos Administrativa del Estado de Chiapas, se declare la **NULIDAD LISA Y LLANA** de las resoluciones impugnadas, como consecuencia de los diversos vicios de legalidad de los que adolece. El sustento de la pretensión antes detallada quedará fehacientemente acreditado en los conceptos de impugnación que más adelante se desarrollarán.

## VI. HECHOS

**1.- NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. de R.L. de C.V.**, es una sociedad mercantil constituida conforme a las leyes mexicanas, tal y como se desprende de los

antecedentes de la copia certificada de la Escritura Pública que se acompaña al presente escrito como ANEXO "1".

**2.- NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.,** tiene como principal actividad la de constituirse como "Tienda de autoservicio con venta de vinos, licores y cerveza en botella cerrada, panadería, farmacia, tortillería y fuente de sodas", tal y como se desprende de la cédula de identificación fiscal expedida por el Servicio de Administración Tributaria, en la que se aprecia que la actividad dada de alta es "Comercio al por menor en tiendas departamentales" que se acompaña como ANEXO "4".

**3.-** Ahora bien, con fecha 14 de mayo de 2019 mi representada fue notificada vía correo electrónico de los oficios impugnados en los que esencialmente se estableció lo siguiente:

a) Oficio MHC/TES/06-A/2019 de fecha 13 de mayo de 2019

Sierva la presente para enviar un cordial saludo y al mismo tiempo para hacer de su conocimiento del presupuesto de cobro por derechos de funcionamiento para el ejercicio 2019, en este municipio de Huixtla, Chiapas, es el siguiente:

PRESUPUESTO DE COBRO DE EJERCICIO	
Referendo de Licencia de Funcionamiento Ejer-2019	
Referendo Anual Depto. Tortillería Ejer-2019	
Referendo Anual Depto. Carnicería Ejer-2019	
Referendo Anual Depto. Maternidad Ejer-2019	
Referendo Anual Depto. Asesorías Ejer-2019	
Referendo Anual Depto. Panadería y Pastelería Ejer-2019	
Referendo Anual Depto. Farmacia Ejer-2019	
Referendo Anual Depto. Telefonía Celular Ejer-2019	
Referendo Anual Depto. Ferretería Ejer-2019	
Referendo Anual Depto. Línea Blanca y Electrónicos Ejer-2019	
Referendo Anual Depto. Refrigeración Ejer-2019	
Referendo Anual Depto. Bebidas Alcohólicas Ejer-2019	
Facilidad Uso de Suelo ejer-2019	
Avenida No Luminosa Ejer-2019	
<b>TOTAL</b>	

Nota: para efectuar el pago por medio de transferencia electrónica o cheque certificado deberá pasar antes con el área de obras públicas para tramitar la Licencia de Facilidad de uso de suelo con su documentación correspondiente.

Los datos bancarios serán los siguientes

NOMBRE  
R.F.C.  
CUENTA BBVA  
CLABE INTERBANCARIA  
SUCURSAL  
CORREO ELECTRONICO

MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS  
MHC850101V86  
1049 TAPACHULA  
tesoreriahuixtla2018\_2021@hotmail.com

Si otro particular de momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o comentario

Atentamente:

C.P. Manuel Bautista Suriano  
Tesorero Municipal.

b) Oficio 005/2019 de fecha 1º de abril de 2019

Huixtla, Chiapas, a 01 de Abril del 2019

NUEVA WALMART DE MEXICO, S.A. DE R.L.  
CALLE NEGRETE, BARRIO ESQUEPULA  
HUIXTLA, CHIAPAS.

Por este medio se le notifica que cuenta con el pago, para cubrir los importes de los Derechos de Funcionamiento Municipales que ya fueron previamente presupuestados con anterioridad al presente, en fecha 24 de febrero del presente, para el Ejercicio Fiscal 2019, al cual deberá acudir al Departamento de Tesorería Municipal de este H. Ayuntamiento, ubicado en Calle Luminosa 1, Manzanillo, con Avenida Central, para comparecer al cobro con la siguiente:

En caso contrario se procederá a la SUSPENSIÓN de sus Actividades Comerciales, con fundamento en lo establecido en el Art. 10, Fracción VII del Bando de Policía y Buen Gobierno en vigor.

ATENTAMENTE

C.P. MANUEL BAUTISTA SURIANO  
TESORERO MUNICIPAL

En virtud de lo anterior, y conforme a los hechos y argumentos que se hacen valer en esta demanda, será claro para esa H. Sala que los oficios impugnados resultan ilegales tal y como se demuestra en los siguientes:

## **VI. CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN**

**PRIMERO.- VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, CONGRUENCIA Y SEGURIDAD Y CERTEZA JURÍDICAS, PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y 70 FRACCIÓN III DEL CÓDIGO FISCAL MUNICIPAL, COMO CONSECUENCIA DEL ILEGAL CÁLCULO Y EJECUCIÓN DE SUPUESTAS CONTRIBUCIONES A CARGO DE MI REPRESENTADA.**

**1.-** Las resoluciones que por esta vía se impugnan, producen consecuencias jurídicas en perjuicio de la sociedad actora, toda vez que las mismas resultan violatorias de los Derechos Fundamentales de Legalidad y de Seguridad y Certeza Jurídicas, por carecer de la debida fundamentación y motivación que exige nuestra Carta Magna.

En el caso concreto, tenemos que la expedición de la sentencia reclamada viola la garantía de legalidad, pues la misma carece de una debida fundamentación y motivación.

**Fundar** significa expresar con toda precisión el precepto legal específico exactamente aplicable al caso concreto. **Motivar** significa señalar también con toda precisión las circunstancias especiales y razones particulares o causas inmediatas que haya tenido en consideración alguna autoridad para emitir un acto, siendo igualmente indispensable, para la cabal observancia del principio de legalidad, que exista una adecuación lógica entre los motivos aducidos y las normas aplicables.

En relación a la fundamentación y motivación que deben revestir los actos de autoridad, a continuación se transcriben las siguientes tesis de jurisprudencia:

**"Época: Octava Época  
Registro: 216534  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Núm. 64, Abril de 1993  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: VI. 2o. J/248  
Página: 43**

### **FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.**

De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser

molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de que ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En materia administrativa, específicamente, para poder considerar un acto autoritario como correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a).- Los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y b).- Los cuerpos legales y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado.

#### SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO

Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. 28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez.

Amparo directo 367/90. Fomento y Representación Ultramar, S.A. de C.V. 29 de enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo.

Revisión fiscal 20/91. Robles y Compañía, S.A. 13 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez.

Amparo en revisión 67/92. José Manuel Méndez Jiménez. 25 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Waldo Guerrero Lázcares.

Amparo en revisión 3/93. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 4 de febrero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez.

#### "Novena Época

Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXII, Diciembre de 2005

Página: 162

Tesis: 1a./J. 139/2005

Jurisprudencia

Materia(s): Común

**FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE.** Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión,

así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso.

De las jurisprudencias en cita se desprende con claridad que todo acto de autoridad, incluyendo las resoluciones jurisdiccionales, deben atender, en términos de los Artículos 14 y 16 de nuestra Constitución Federal, al *Principio de Legalidad*, es decir, a una debida fundamentación y motivación, lo que indefectiblemente implica la correcta interpretación y aplicación de los preceptos legales que resulten aplicables.

Ahora bien, en el caso concreto tal Principio de Legalidad está reflejado y detallado en el Artículo 106 Fracción IV del Código Fiscal Municipal, el cual para mayor y pronta referencia es del tenor literal siguiente:

#### **Código Fiscal**

**Artículo 70.** los actos administrativos que se deban notificar, deberán tener por lo menos los siguientes requisitos:

(...)

III. Estar fundado y motivado

(...)

**2.-** Una vez expuestas las consideraciones que anteceden, se manifiesta que de la lectura de los actos impugnados se desprende claramente que las autoridades demandadas violentaron los Principios de Legalidad y de Seguridad y Certeza Jurídicas previstos en los dispositivos normativos antes señalados. Lo anterior, en vista que de haber atendido al Principio de Legalidad y haber actuado privilegiando la Certeza y Seguridad Jurídicas, **NO habría resuelto EFECTUAR COBROS POR DERECHOS DE MANERA ARBITRARIA.**

**3.- INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y AUSENCIA DE MOTIVACIÓN.** Como se precisó en la primera parte del presente Concepto de Impugnación, **Motivar** significa **señalar con toda precisión las circunstancias especiales y razones particulares o causas inmediatas que haya tenido en consideración alguna autoridad para emitir un acto,** siendo igualmente indispensable, para la cabal observancia del principio de legalidad, **que exista una adecuación lógica entre los motivos aducidos y las normas aplicables.**

A continuación, se procederá al análisis de cada uno de los oficios para determinar la ilegalidad de los mismos:

#### **A. Oficio número MCH/TES/06-A/2019 de fecha 13 de mayo de 2019.**

En el caso concreto como se aprecia de la simple lectura del oficio en estudio, la autoridad demandada se limita a establecer una cantidad líquida a pagar por mi representada por supuestos "DERECHOS DE FUNCIONAMIENTO PARA EL EJERCICIO 2019", sin precisar a qué derechos se refiere o con fundamento en qué ordenamiento pretende ejecutar el cobro de

dichos derechos, pues como claramente podrán apreciar ustedes CC. Magistrados ni siquiera cita fundamentos legales en el oficio en estudio que soporten el actuar arbitrario de la autoridad municipal.

008

En efecto, el oficio se limitó a establecer que la hoy actora debía cubrir la cantidad de

[REDACTED] por supuestos derechos de funcionamiento, proporcionando un listado de conceptos y los datos de una cuenta bancaria a nombre del "Municipio de Huixtla Chiapas", **SIN NI SIQUIERA PRECISAR EL ORDENAMIENTO LEGAL O REGLAMENTARIO EN QUE PRETENDIDAMENTE FUNDAMENTAN SU REQUERIMIENTO Y SIN TAMPOCO MOTIVAR EL PORQUE SUPUESTAMENTE SE ACTUALIZABA LA HIPÓTESIS NORMATIVA**, lo que indudablemente constituye una absoluta y flagrante violación al Principio de Legalidad antes desarrollado.

Como materialización de tal violación nos permitimos citar la parte conducente de la resolución impugnada:

PRESUPUESTO DE COBRO DE EJERCICIO	
Referendo de Licencia de Funcionamiento Ejec-2019	
Referendo Anual Depto. Tuxtla Ejec-2019	
Referendo Anual Depto. Carretera Ejec-2019	
Referendo Anual Depto. Abastos Ejec-2019	
Referendo Anual Depto. Paradero y Pasadizo Ejec-2019	
Referendo Anual Depto. Fomento Ejec-2019	
Referendo Anual Depto. Telefonía Celular Ejec-2019	
Referendo Anual Depto. Fertilizantes Ejec-2019	
Referendo Anual Depto. Línea Blanca y Electrónicos Ejec-2019	
Referendo Anual Depto. Relación Ejec-2019	
Referendo Anual Depto. Bebidas Alcohólicas Ejec-2019	
Facilidades Usd de Suelo Ejec-2019	
Anuncio No Luminoso Ejec-2019	
TOTAL	

Los datos bancarios serán los siguientes

NOMBRE: MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS  
R.F.C.: MHC850101V86  
CUENTA BBVA: [REDACTED]  
CLASE INTERBANCARIA: [REDACTED]  
SUCURSAL: 1848 TAPACHULA  
CORREO ELECTRONICO: tesoreriahuixtla2018\_2021@hotmail.com

Sin otro particular de momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o comentario

[REDACTED]  
[REDACTED]



#### B. Oficio número 005/2019 de fecha 1º de abril de 2019.

En este caso, la autoridad demandada se limitó a referir que NWM tenía 72 horas para cubrir el importe de "Derechos de Funcionamiento Municipales", apercibiéndolo con suspensión de sus actividades comerciales en caso de omisión, **apercibimiento que tampoco tiene sustento legal.**

Sin embargo, tal y como se aprecia del oficio en estudio, la autoridad cometió diversas irregularidades que vale la pena destacar:

- Se refiere un supuesto presupuesto que se hizo en el Oficio #06 de fecha 26 de febrero, sin embargo, se manifiesta que **mi poderdante desconoce el contenido de ese documento, ya que el mismo nunca le fue debida y legalmente notificado**, por lo que la autoridad no puede basar un acto administrativo de ejecución en un oficio viciado de origen<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Época: Séptima Época  
Registro: 252103  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
**Tipo de Tesis: Jurisprudencia**

ii) Por otra parte, la autoridad es omisa en precisar y mi representada desconoce a qué pretendidos derechos de funcionamiento municipales se refiere, ya que no hay certeza de la cantidad ni conceptos que se debe pagar, toda vez que no hay una referencia literal ni jurídica de los mismos.

En relatadas circunstancias queda demostrado que la demandada **NO PRECISÓ EL ORDENAMIENTO LEGAL O REGLAMENTARIO EN QUE FUNDAMENTAN SU REQUERIMIENTO Y TAMPOCO MOTIVÓ EL PORQUE SUPUESTAMENTE SE ACTUALIZABA LA HIPÓTESIS NORMATIVA**, lo que indudablemente constituye una absoluta y flagrante violación al Principio de Legalidad antes desarrollado.

Como materialización de tal violación nos permitimos citar la parte conducente de la resolución impugnada:

Por este medio se le notifica que conde con el pago de los impuestos de los Derechos de Funcionamiento Municipales que ya fueron oportunamente presupuestados con número de Oficio 1001 con fecha 10 de Febrero del presente año el Ejercicio Fiscal 2019, el cual deberá acudir al Departamento de Tesorería Municipal de este H. Ayuntamiento, ubicado en Calle Francisco I. Madero 1040, con Avenida Central para pagarle al corriente con lo solicitado.

En caso contrario se procederá a la SUSPENSIÓN de sus Actividades Comerciales con fundamento en lo establecido en el Artículo Fracción VII del Bando de Policía y Buen Gobierno en vigor.

Con las inserciones anteriores queda fehacientemente acreditada la ilegalidad de la resolución impugnada, dando lugar, como consecuencia de la indebida fundamentación y la ausencia total de motivación, a la declaración de **NULIDAD LISA Y LLANA** de las resoluciones impugnadas dictadas por la misma autoridad respecto de la misma persona moral ahora actora.

4.- Ahora bien, en relación con el oficio 005/2019 de fecha 1º de abril de 2019, el mismo únicamente invoca el Artículo 85 Fracción VII del Bando de Policía y Buen Gobierno, el cual para mayor y pronta referencia es del tenor literal siguiente:

**"Artículo 85.-** El Municipio promoverá y fomentará el desarrollo económico de la municipalidad, estableciendo sólo aquellas regulaciones necesarias para proteger el interés público.

Son atribuciones de la Autoridad Municipal, en materia de regulación de las actividades económicas:

...

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Volumen 121-126, Sexta Parte  
Materia(s): Común  
Tesis:  
Página: 280

**ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE.** Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal.



VII. Ordenar la suspensión de actividades o clausura, de las empresas que no cuenten con la autorización correspondiente, o que puedan afectar notoria y gravemente al medio ambiente, pongan en riesgo la seguridad, la paz, la tranquilidad, la salud pública y causen daños al equipamiento y/o la infraestructura urbana.

...

De la transcripción anterior se desprende que si bien la Autoridad Municipal puede ordenar la suspensión de actividades cuando se acrediten los extremos normativos ahí planteados, lo cierto es que, en el caso en estudio no se configura la hipótesis normativa ahí planteada por lo siguiente:

- a) No se requirió a NWM la exhibición de alguna autorización.
- b) Las actividades de mi poderdante no afecten notoria y gravemente el medio ambiente.
- c) No hay un riesgo a la seguridad, paz, tranquilidad o salud pública.
- d) No se causan daños al equipamiento o infraestructura urbana.

Por lo tanto, el Tesorero **no puede ordenar una suspensión con base en la omisión de pago de derechos de funcionamiento**, los cuales se reitera se desconoce su monto y fundamento, ya que aceptar dicha hipótesis sería aceptar que un pretendido crédito fiscal sea la razón de suspender actividades comerciales de cualquier gobernado, situación que va en contra de los derechos fundamentales antes referidos.

En efecto, las contribuciones son obligaciones legales de derecho público para el sostenimiento de los gastos públicos de forma proporcional y equitativa, sin embargo, lo anterior no implica que en la ejecución de estos se limiten las libertades de los gobernados, al grado de que la autoridad intente "clausurar o suspender" actividades comerciales que se están ejerciendo al marco de la ley.

5.- Por otra parte, el Tesorero Municipal está ejerciendo atribuciones que le corresponden a la autoridad administrativa y no a la fiscal (recaudadora), ya que pretende ejercer una facultad que le corresponde exclusivamente a la Autoridad Municipal Administrativa, que para mayor y pronta referencia se describe en los Artículos 3, 20 y 26 del Bando de Policía y Gobierno Municipal de Huixtla, que se transcribe a continuación:

"**Artículo 3.-** Para los efectos del presente Bando de Policía y Gobierno Municipal de Huixtla, se tendrá por:

...

V. Autoridad Municipal: indistintamente, el Ayuntamiento o la Administración Pública Municipal.

..."

"**Artículo 20.-** El Gobierno del Municipio de Huixtla está depositado en un cuerpo colegiado que se denomina Ayuntamiento.

El Ayuntamiento opera como una asamblea deliberante denominada Cabildo y está integrado por el Presidente Municipal, el Síndico y 6 (seis) Regidores propietarios, un Síndico Propietario y un Síndico Suplente y 3 Regidores Suplentes de mayoría relativa y los regidores plurinominales, electos según el principio de representación proporcional, de acuerdo a la Ley Orgánica Municipal del Estado.

..."

"**Artículo 26.-** La Administración Municipal se ejercerá por su titular, el Presidente Municipal.

..."

Por lo tanto, el hecho de que el Tesorero Municipal funde su actuación en el Artículo 85 Fracción VII del Bando de Policía y Buen Gobierno es incorrecto y, por lo tanto ilegal.

6.- Precisado lo anterior, es vital señalar que los derechos son las contribuciones que gravan un servicio realizado por el Estado, tomando como base el beneficio o coste derivado del mismo para cada ciudadano.

Sus características son las siguientes:

- a) El Estado cobra un precio por el uso o aprovechamiento de un bien o servicio ofrecido.
- b) El precio pagado por el ciudadano al Estado guarda relación directa con los beneficios derivados del bien o servicio ofrecido.
- c) El particular tiene la opción de adquirir o no el bien o servicio.
- d) El precio cubre los gastos de funcionamiento y las previsiones para amortización y crecimiento de la inversión.

En relatadas circunstancias, el Bando de Policía y Buen Gobierno Municipal de Huixtla, contempla los siguientes servicios municipales:

#### CAPÍTULO ÚNICO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

ARTÍCULO 62.- El Municipio de Huixtla prestará los siguientes servicios

- públicos:
- I. Agua potable, alcantarillado;
  - II. Alumbrado público y electrificación;
  - III. Limpia, recolección y tratamiento de desechos sólidos;
  - IV. Mercados;
  - V. Parques;
  - VI. Rastros;
  - VII. Calles, pavimentos, banquetas, jardines y parques públicos;
  - VIII. Seguridad Pública Tránsito y Vialidad y estacionamientos;
  - IX. Protección Civil;
  - X. Ecología y protección del medio ambiente; (de acuerdo con la Ley Estatal y Federal de Ecología y Protección del Medio Ambiente, el municipio está obligado a colaborar en la protección de la Ecología y del Medio Ambiente)
  - XI. Arte, cultura y deporte;
  - XII. Asistencia y desarrollo social;
  - XIII. Los demás que determine la ley, el interés colectivo, las condiciones territoriales, sociales y económicas, de conformidad con la capacidad administrativa y financiera del Municipio;

Por su parte la Ley de Ingresos para el ejercicio 2019, únicamente contempla los siguientes derechos:

#### Derechos

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público

Derechos por Prestación de Servicios

Otros Derechos

Accesorios de Derechos

En efecto, de las disposiciones antes referidas no se desprende el cobro de "derechos por funcionamiento" que indebidamente la demandada intenta cobrar a mi representada, por lo tanto, no se cumple con el primer requisito de cualquier contribución: **TODA CONTRIBUCIÓN DEBE ESTAR PREVISTA EN LEY**, SITUACIÓN QUE EN EL PRESENTE CASO NO SE ACTUALIZA, ya que ha quedado demostrado que los supuestos derechos que se requieren de pago a mi representada no se encuentran contemplados en ordenamiento legal vigente alguno.

En estrecha relación con lo anterior, debe señalarse que al no haber efectuado una debida y suficiente fundamentación y motivación de sus actos, las autoridades demandadas estaban **IMPOSIBILITADAS para pretender realizar el cobro de los Derechos antes referidos y mucho menos para apercibir a mi poderdante con una suspensión de sus actividades comerciales.**

7.- Ahora bien, la autoridad realiza un cálculo sobre el pago de los supuestos derechos a pagar por mi representada, llegando a la absurda conclusión de que la misma debía cubrir el monto de [REDACTED], lo cual se reitera es ilegal, ya que no existe fundamento legal que soporte el cálculo formulado por la demandada.

8.- Por otra parte, en lo que refiere al oficio número MHC/TES/06-A/2019 no se desprende que la autoridad demandada haya realizado la verificación correspondiente para soportar que mi poderdante realiza las actividades ahí detalladas, por lo tanto, al no se robustece la ilegalidad de la resolución impugnada.

Esto es así ya que la demandada se limitó a cobrar diversos refrendos sin constatar que mi poderdante realizara dichas actividades en su establecimiento mercantil, lo cual en a todas luces resulta ilegal y contradictorio.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, lo procedente conforme a Derecho es que se declare la **NULIDAD LISA Y LLANA** de los actos específicamente impugnados en los términos contenidos en el presente concepto de nulidad.

**SEGUNDO.- VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y 70 DEL CÓDIGO FISCAL MUNICIPAL, EN RAZÓN DE LAS DIVERSAS ILEGALIDADES QUE SE DETALLAN.**

1.- Los actos impugnados resultan violatorios de los Artículos 3 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado y 70 del Código Fiscal Municipal y, en última instancia, de los Artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2.- Al respecto, conviene recordar que el primer párrafo del Artículo 16 de nuestra

Ley Fundamental, textualmente dispone:

**"Artículo 16.** Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.  
..."

Conviene citar los Artículos señalados en el título del concepto de impugnación que se desarrolla, cuyo contenido fue arbitrariamente vulnerado por la autoridad demandada en perjuicio de mi representada:

**"ARTÍCULO 70.** los actos administrativos que se deban notificar, deberán tener por lo menos los siguientes requisitos:

**i. Constar por escrito;**

ii. Señalar la autoridad que lo emite;

iii. Estar fundado y motivado;

iv. Expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate;

**v. Ostentar la firma del funcionario que lo emite y el nombre o nombres de las personas a los que vaya dirigido. cuando se ignore el nombre de la persona a la que va dirigido, se señalaran los datos suficientes que permitan su identificación."**

(El énfasis es añadido)

De acuerdo con lo anterior, los Principios Fundamentales de Legalidad, Seguridad y Certeza Jurídica consisten, esencialmente, en que para que una autoridad pueda afectar la esfera jurídica de los gobernados, se requiere que la misma esté debidamente facultada en Ley para expedir el acto de privación o molestia; que su actuación sea conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, que el acto esté debidamente motivado, esto es, señalando la causa legal de su expedición.

En este sentido, el denominado "*Control de Legalidad*" de los actos de autoridad tiene como objetivo que las autoridades se ciñan en forma estricta a las facultades que les otorga el legislador, para que sus determinaciones en todo momento tengan fundamento y consecuencias de derecho.

Así, el Principio de Legalidad consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite expresamente. Asimismo, el control de legalidad no se limita a que la autoridad que emite el acto tenga facultades para ello, sino que la obliga a fundar y motivar debidamente sus actuaciones, con objeto de que éstas no sean emitidas de forma arbitraria.

La **fundamentación legal** estriba, tal y como lo ha resuelto jurisprudencialmente el Poder Judicial de la Federación en distintos criterios, en:

- i. Estar expresamente facultada por un ordenamiento legal para la expedición del acto e interpretar el mismo de manera correcta, apegándose al espíritu de la norma;

- ii. Apoyar su actuación en las disposiciones vigentes con anterioridad al hecho; y,
- iii. Citar en su resolución de forma clara y precisa, la norma o normas aplicables al caso concreto, pues de lo contrario su actuación será irremediablemente inconstitucional y, desde luego, que el acto de autoridad sea expedido de acuerdo a la realidad y no producto del error.

Por su parte, la ***motivación legal*** consiste en la expresión ajustada a situaciones verdaderas, de las causas o razones y circunstancias, por las cuales la autoridad emisora considera actualizada la hipótesis contenida en la norma que sirve de fundamento al acto de molestia o privación, al caso concreto. Implica la necesaria adecuación que debe hacer la autoridad entre la norma general que sirve de sustento al acto de molestia y el caso específico en el que éste va a operar o surtir sus efectos.

Motivar adecuadamente un acto implica la obligación a cargo de la autoridad de justificar con hechos y razonamientos que la norma invocada como fundamento es exactamente aplicable al caso concreto, lo que necesariamente implica que se invoquen hechos y razonamientos claros, inteligibles, ciertos y bastantes para provocar el acto de autoridad, para que así se dé al gobernado la posibilidad de ejercer la defensa que estime procedente en caso de que considere que tal acto no está apegado a derecho.

**3.- OMISIÓN DE FUNDAR Y MOTIVAR COMPETENCIA.** Dicho lo anterior, debemos señalar que de la simple lectura de cada uno de los actos administrativos impugnados, se puede apreciar que se omite FUNDAR Y MOTIVAR suficiente y adecuadamente la ejecución de cobro de derechos, tal y como se ha desarrollado en el concepto de impugnación anterior y que, en obvio de repeticiones, se solicita se atienda a tales consideraciones de hecho y de Derecho.

Sin embargo, conviene resaltar que la competencia, en términos generales, es la idoneidad atribuida por ley a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones. Desde el punto de vista gramatical, el maestro Carlos Arellano García, establece que la competencia es la aptitud legal que tiene un órgano del Estado para ejercitar derechos y cumplir obligaciones.<sup>2</sup>

En este sentido, la competencia de las autoridades en el dictado de sus actos implica una potestad para modificar o afectar la esfera jurídica del gobernado, por lo que el Estado a través del poder legislativo confiere facultades y atribuciones a los órganos públicos distinguiendo de manera particular y específica el área de competencia de cada uno, con el fin de que el gobernado tenga certeza sobre la actuación del poder público a través de sus servidores.

Sobre este punto en particular, es importante resaltar que los actos de autoridad necesariamente deben emitirse por quién está legitimado para ello, expresándose en el

<sup>2</sup> Arellano García, Carlos *Teoría General del Proceso*, México, Porrúa, p. 352

texto del mismo acto el dispositivo, acuerdo o decreto que le otorgue tal legitimación.

Asimismo, la citación del cuerpo normativo que otorgue competencia al servidor público debe realizarse con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos y fracciones que establezcan las facultades en el caso concreto, sobre todo si se trata de un acto que causa un perjuicio a la esfera jurídica del gobernado.

Sirve de apoyo a lo anterior, los siguientes criterios **jurisprudenciales**:

**"Séptima Época**  
**Instancia: Segunda Sala**  
**Fuente: Semanario Judicial de la Federación**  
**Volumen 163-168, Tercera Parte**  
**Página: 9**  
**Tesis Aislada**  
**Materia(s): Común**

**ACTOS DE MOLESTIA. DEBEN SER EFECTUADOS POR AUTORIDAD COMPETENTE QUE LOS FUNDE Y MOTIVE.**

La interpretación correcta de la garantía individual de legalidad que consagra el artículo 16 de la Constitución General de la República, respecto de los actos de molestia, es de que, como requisitos imprescindibles, sean efectuados por autoridad competente y que ésta funde y motive la causa legal del procedimiento, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe expresar, como parte medular, los fundamentos legales que le den base jurídica al acto, pues de lo contrario adolece de incorrecta fundamentación al no invocarse el precepto normativo debido, que faculte a la autoridad para realizarlo.

SEGUNDA SALA."

**"Octava Época**  
**Registro digital: 217655**  
**Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito**  
**Jurisprudencia**  
**Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación**  
**Núm. 60, Diciembre de 1992**  
**Materia(s): Común**  
**Tesis: I. 1o. A. J/21**  
**Página: 39**

**COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. FUNDAMENTACION DE LA.**

El artículo 16 de la Constitución Federal de la República textualmente establece: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". De la anterior transcripción se llega al conocimiento de que dicho precepto exige la fundamentación y motivación exclusivamente para la causa legal del procedimiento, es decir, a invocar los preceptos correspondientes que sirven de apoyo al acto que se emite, así como las razones de hecho que hacen que el gobernado se encuentre en la hipótesis normativa que se señaló, mas no exige la fundamentación de la competencia de la autoridad que emite el acto, pues tan solo requiere que ésta efectivamente sea competente, situación distinta a fundamentos de las facultades que le fueron conferidas por la ley. En tales condiciones, basta que la autoridad emisora del acto sea competente y que esa competencia se encuentre prevista en disposiciones legales o reglamentarias que fueron debidamente publicadas para que se satisfagan los requisitos exigidos por el artículo 16 constitucional en ese aspecto.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO."

(Subrayado añadido)

En este sentido, es claro que ninguno de los actos administrativos impugnados refiere o invoca fundamento alguno que le otorgue competencia a la autoridad demandada, **por lo cual mi representada se encuentra en estado de incertidumbre jurídica al desconocer si el Tesorero Municipal cuenta con las atribuciones suficientes para afectar la esfera jurídica de mi poderdante para exigir el cobro de derechos en los términos que lo hizo.**

**4.- AUSENCIA Y VULNERACIÓN DE LOS REQUISITOS Y ELEMENTOS DE TODO ACTO ADMINISTRATIVO.** Expuestas las consideraciones que anteceden se debe precisar que la determinación contenida en el oficio que por esta vía se impugna resulta ilegal por las siguientes consideraciones, pues de las mismas se aprecia con claridad que la autoridad demanda **NO cumplió con los elementos y requisitos de validez** previstos por la legislación aplicable:

**4.1.- NO IDENTIFICACIÓN PRECISA DEL ESTABLECIMIENTO SANCIONADO.** Ahora bien, en el caso de las resoluciones que se detallan enseguida, **es claro y evidente que NO ha mediado una correcta identificación del establecimiento objeto de la ejecución de las contribuciones pues ni siquiera señala la nomenclatura oficial**, lo que en sí mismo es **ILEGAL**.

**4.2.- AUSENCIA DE REFERENCIA DE EXPEDIENTE.** En el mismo tenor de los puntos previos, todo acto administrativo debe contener la referencia específica de identificación del expediente de que se trate, pues de lo contrario, como en el caso particular, el administrado no tiene Certeza ni Seguridad Jurídicas del actuar de las autoridades.

Lo anterior se acredita fehacientemente del contenido de los propios actos que se impugnan, **pues de ninguna parte de los mismos se aprecia que se haga referencia específica a la identificación del expediente administrativo que debió conformarse.**

**4.3.- AUSENCIA DE MENCIÓN DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PROCEDENTES.** Existe una flagrante violación al Principio Fundamental de Legalidad y al Principio *Pro Personae*, pues **la autoridad demandada omitió precisar, en el acto administrativo impugnado, los recursos administrativos que pudiera haber interpuesto mi representada y hoy demandante en caso de estar inconforme con el propio acto, lo que naturalmente afecta las defensas de mi poderdante.**

**4.4.- AUSENCIA DE MENCIÓN DE LA OFICINA EN QUE SE ENCUENTRA EL EXPEDIENTE.** Como se aprecia la autoridad tiene la obligación de precisar la ubicación del expediente, pues sólo de esta forma el particular podrá hacer efectivo su Derecho de conocer las actuaciones que integran el expediente conformado en el que es parte; sin embargo, **en el caso concreto las demandas omitieron cumplir con tal requisito de validez de todo acto administrativo.**

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, lo procedente conforme a Derecho es que se declare la **NULIDAD LISA Y LLANA** de los actos específicamente combatidos.

**TERCERO.- VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 70 FRACCIÓN V Y 71 FRACCIÓN I DEL CÓDIGO FISCAL MUNICIPAL POR LA IRREGULAR NOTIFICACIÓN Y AUSENCIA DE FIRMA AUTÓGRAFA EN LOS ACTOS IMPUGNADOS.**

1.- Por economía procesal solicito que se tengan por reproducidos como si a la letra se insertaran los argumentos en relación con los derechos fundamentales de legalidad y motivación expresados en los conceptos de impugnación anteriores.

2.- Ahora bien, las disposiciones del Código Fiscal Municipal son del tenor literal siguiente:

**"Artículo 70.** Los actos administrativos que se deban notificar, deberán tener por lo menos los siguientes requisitos:

...

**V. Ostentar la firma del funcionario que lo emite** y el nombre o nombres de las personas a los que vaya dirigido. cuando se ignore el nombre de la persona a la que va dirigido, se señalarán los datos suficientes que permitan su identificación.

..."

**"Artículo 71.** Las notificaciones de los actos administrativos se efectuarán de la siguiente manera:

**I. Personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, cuando se trate de citatorios, requerimientos, solicitudes de informes o documentos y de actos administrativos que puedan ser recurridos.**

Cuando la notificación se trate de efectuar personalmente y el notificador no encuentre a quien deba notificar, le dejara citatorio en el domicilio, para que espere a una hora fija del día hábil siguiente.

El citatorio será siempre para la espera antes señalada y si la persona o su representante legal no esperare, se practicará la diligencia con quien se encuentre en el domicilio o en su defecto, con un vecino.

Para lo señalado en esta fracción, en el momento de la notificación se entregara al notificado o a la persona con quien se entienda la diligencia, original del documento a que se refiere la notificación.

..."

(énfasis añadido)

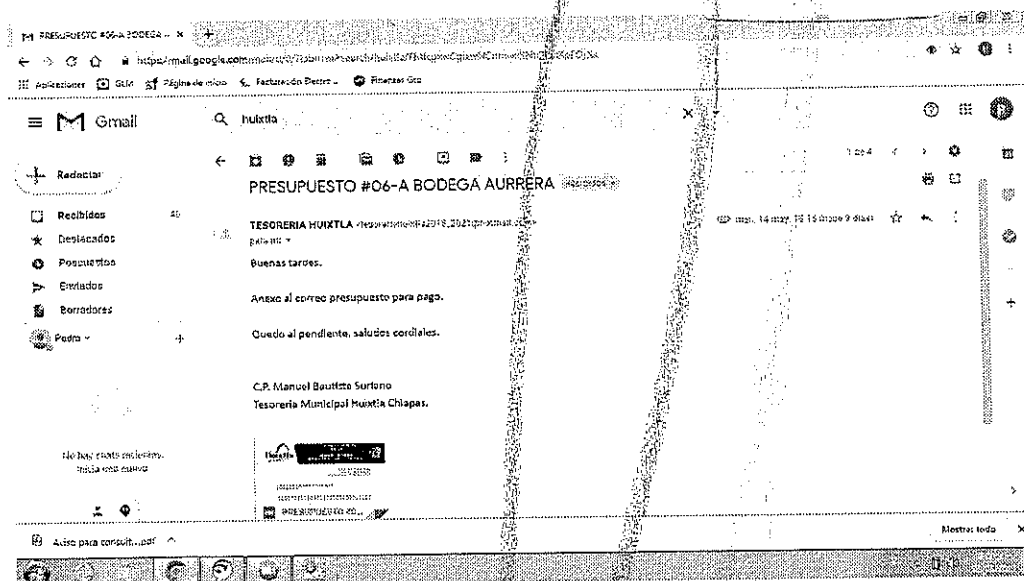
De la transcripción anterior se desprende como requisitos indispensables para los actos emitidos por autoridades fiscales, entre otros, los siguientes:

- a) Ostentar la firma del funcionario que lo emite.
- b) Se deben notificar personalmente o por correo certificado aquellos actos administrativos que puedan ser recurridos por el particular.

**3.- AUSENCIA DE FIRMA AUTÓGRAFA O, EN SU CASO DOCUMENTO CODIFICADO.** Esto es así, ya que contrario a lo establecido por el Código Fiscal Municipal,



los oficios impugnados fueron notificados vía correo electrónico en copia simple sin cumplir con la normatividad fiscal aplicable, tal y como se refleja de la siguiente captura de pantalla:



De lo anterior resulta claro que no hay certeza sobre quién emitió el acto, ya que en el mismo aparece una copia de la firma del C.P. Manuel Bautista Suriano, en su carácter de Tesorero Municipal, sin embargo, no existe certeza de la procedencia de dicho correo electrónico, ya que se realizó de una cuenta comercial denominada tesoreriahuixtla2018-2021@hotmail.com.

En este orden de ideas, se pretende modificar y afectar la esfera jurídica del gobernado con base en un acto que carece del elemento esencial de cualquier acto administrativo, es decir, la expresión de voluntad de la Administración Pública a través del servidor público con facultades para emitirlo.

No es óbice a lo anterior que la ley faculte a la autoridad para enviar los documentos por correo certificado, en virtud de que el acto que hoy se impugna FUE NOTIFICADO POR UN CORREO ELECTRÓNICO COMERCIAL, es decir, sin atender los extremos normativos del Artículo 71 del Código Fiscal Municipal.

Asimismo, carece de identificación clara y precisa sobre el servidor público que lo emite, en efecto, se desconoce si la firma corresponde al documento y correo electrónico, ya que no hay certeza del mismo al no ser original ni estar con los elementos digitales suficientes y necesarios para su identificación.

Por lo tanto, para que un acto o resolución administrativa cumpla con las exigencias establecidas en el Artículo 16 constitucional debe contener la firma autógrafa del funcionario emisor, por ser este signo gráfico el que otorga certeza y eficacia a los actos de autoridad ya que constituye la única forma en que puede asegurarse al particular que la autoridad acepta su contenido; consecuentemente la carga probatoria sobre la firma del acto administrativo recae en la demandada, la cual al no poder demostrar fehacientemente que

el mismo se emitió con dicho requisito esencial conlleva a que esa H. Sala proceda a declarar la nulidad de los actos impugnados.

Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente jurisprudencia:

**"Décima Época**  
**Registro digital: 2005645**  
**Instancia: Plenos de Circuito**  
**Jurisprudencia**  
**Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación**  
**Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II**  
**Materia(s): Administrativa**  
**Tesis: PC.XXX. J/6 A (10a.)**  
**Página: 1691**

**FIRMA AUTÓGRAFA EN EL MANDAMIENTO DE AUTORIDAD. APLICABILIDAD DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 195/2007 Y 2a./J. 13/2012 (10a.) DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN EL SUPUESTO DE QUE EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO LA ACTORA AFIRME QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA CARECE DE AQUELLA Y LA DEMANDADA REFUTE ESE ARGUMENTO SOSTENIENDO QUE EN LA CONSTANCIA DE SU NOTIFICACIÓN SE ASENTÓ QUE SE HIZO ENTREGA DE ESA RESOLUCIÓN EN ORIGINAL, INCLUYÉNDOLA.**

Los referidos criterios jurisprudenciales son aplicables en caso de que en un juicio contencioso administrativo la actora arguya que la resolución impugnada carece de validez por la ausencia de firma autógrafa de la autoridad que la emitió, en términos del artículo 38, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, y al contestar la demanda ésta afirme que dicha resolución fue notificada a la accionante con firma autógrafa (y para acreditar esta aseveración aporte las constancias relativas); de ahí que corresponde a la autoridad emisora la carga de la prueba, aun cuando exista la constancia del notificador que afirme que sí la contiene, pues si bien lo asentado por el notificador tiene la presunción de legalidad prevista en los artículos 68 del Código Fiscal de la Federación y 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para establecer las cargas probatorias debe atenderse al sistema de distribución previsto al efecto en el Código Federal de Procedimientos Civiles y no en la presunción de legalidad referida. Por tanto, basta que la autoridad afirme en su contestación que el acto contiene firma autógrafa, para que quede obligada a demostrarlo, pues la mayor facilidad de prueba, que en general tiene el hecho positivo, la obliga a ofrecer la prueba pericial grafoscópica, que constituye el único medio idóneo para acreditarlo.

PLENO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO."

En relatadas circunstancias, lo procedente y fundado conforme a Derecho es que se declare la nulidad de las resoluciones impugnadas, ya que carecen del elemento esencial de cualquier acto administrativo (firma autógrafa) además de haber sido notificados por correo electrónico comercial, sin identificación clara y precisa del remitente.

**CUARTO- VIOLACIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL DE LIBERTAD DE COMERCIO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 5º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN RAZÓN DEL APERCIBIMIENTO DESPROPORCIONADO DE LA AUTORIDAD DEMANDADA.**

1. Por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación y a través del cual se modificó la denominación del Capítulo I del Título Primero y se reformaron diversos Artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estableció en nuestro Sistema Jurídico la teoría de sujeción del Estado a la protección de los Derechos Humanos previstos

no sólo en la Constitución Federal, sino también en los Tratados Internacionales celebrados por el Estado Mexicano.

En tal sentido, el nuevo contenido constitucional amplía y robustece la protección de los Derechos Humanos y sus garantías, puesto que con la reforma al Artículo 1º se prevé que todas las personas, sin distinguir entre físicas y morales, deben gozar los Derechos Fundamentales que en el ordenamiento supremo se reconocen, pero también de los demás Derechos Humanos y garantías que se reconozcan en algún Tratado Internacional celebrado por el Estado Mexicano.

Asimismo, el precepto constitucional en cuestión determina que los Derechos Fundamentales deberán interpretarse conforme a la Constitución y a los Tratados Internacionales (principio de interpretación conforme), desde el punto de vista que favorezca más al individuo, garantizándose con ello la protección más amplia y completa, a lo que la doctrina y los precedentes judiciales han denominado "interpretación *pro persona*" o "principio *pro homine*".

Así, la Constitución mexicana prevé, a partir del Decreto de reforma de junio del año pasado y desde el primero de sus artículos, lineamientos y directrices respecto de la obligación que tienen TODAS LAS AUTORIDADES del Estado Mexicano -sin distinguir entre niveles federal, estatal o municipal ni de naturaleza legislativa, ejecutiva o jurisdiccional- de respetar los Derechos Fundamentales que se establecen no sólo en la Constitución Federal, sino en todos los instrumentos internacionales en los que México sea parte y que resulten aplicables a un caso concreto, tomando en cuenta fundamentalmente los principios de progresividad, interdependencia, universalidad e indivisibilidad, así como el de mayor beneficio de la persona. Lo anterior tiene sustento en la interpretación armónica de lo previsto por los Artículos 1º y 133 de la Constitución Federal.

Por lo que respecta a la **garantía constitucional de libertad de comercio**, o también llamada garantía de libertad de ocupación o de trabajo, prevista por el Artículo 5º de la Constitución Federal, debe mencionarse que la misma implica el **reconocimiento del derecho inherente con que cuenta el gobernado para elegir y ejercer la ocupación que más le convenga**, sin que el constituyente haya dispuesto mayores limitaciones que las previstas por el propio dispositivo normativo en comento, que para una mejor referencia se transcribe a continuación, en su parte conducente:

*"A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad..."*

De la parte conducente del Artículo antes transcrito se desprende lo siguiente:

21

021

- (i) Que la actividad laboral debe estar permitida por la ley, es decir, que sea lícita.
- (ii) Que el ejercicio de la libertad constitucional en análisis sólo podrá vedarse por determinación judicial cuando se afecten los derechos de tercero.
- (iii) Que el ejercicio de la libertad de ocupación sólo podrá vedarse por resolución gubernativa cuando se ofendan los derechos de la sociedad.

2. Ahora bien, en el caso particular, la omisión reclamada viola en perjuicio de la parte quejosa su **DERECHO FUNDAMENTAL DE LIBERTAD DE COMERCIO** que establece el Artículo 5o. de la Carta Magna, en razón de que **sin motivo justificado se le priva de su derecho a llevar a cabo su actividad consagrada en su objeto social y dada de alta ante el Servicio de Administración Tributaria al apercibirla con suspender sus actividades comerciales.**

**LO ANTERIOR, ADEMÁS CONSTITUYE UNA INTERVENCIÓN NO AUTORIZADA DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA Y EN EL LIBRE MERCADO, PUES LA MISMA NO SE ENCUENTRA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 28 CONSTITUCIONAL.**

Por otro lado, es un hecho que **no existe una determinación judicial que prohíba a mi representada dedicarse a la actividad que pretende, no hay afectación a terceros y tampoco existe una resolución gubernativa al respecto.**

En este punto, es oportuno destacar que el término utilizado por el constituyente para limitar el ejercicio de esta libertad constitucional, de ninguna manera responde a una prohibición absoluta. Para mayor claridad, acudimos al Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, cuyo texto en una primera acepción define "**vedar**" como "prohibir por ley, estatuto o mandato", mientras que en una segunda acepción lo define como "**impedir, estorbar o dificultar**", con lo que se concluye válidamente que el término en cuestión no solo implica una prohibición absoluta, sino incluso una limitación parcial en el ejercicio de un derecho, como en el caso concreto ocurre.

De la simple lectura del Artículo constitucional en cuestión, se deduce que el ejercicio de la libertad de comercio no es absoluta, pues el mismo puede ser limitado, (i) por determinación judicial cuando se afecten los derechos de tercero o (ii) por resolución gubernativa cuando se ofendan los derechos de la sociedad, lo que en el presente caso no acontece, ya que no se afectan derechos de terceros y mucho menos de la sociedad en general, en razón de que mi representada realiza actividades comerciales lícitas en un establecimiento que tiene uso de suelo permitido y que cumple con la normatividad aplicable.

Consecuentemente, se concluye que **el acto reclamado, al limitar y restringir, sin motivo justificado, el ejercicio de la libertad de comercio de la quejosa, está violando flagrantemente el Artículo 5º Constitucional.**

Respecto de la clara y flagrante violación al Derecho Fundamental de Libertad de Comercio, sirven de apoyo a lo anterior los siguientes precedentes jurisprudenciales:

**"LIBERTAD DE TRABAJO.**

*La garantía consagrada por el artículo 4o. constitucional sobre la libertad de trabajo, industria o comercio, no es absoluta, y puede ser restringida legítimamente, cuando así lo exija el bienestar de la colectividad. Por tanto, aunque unos decretos contengan disposiciones que no tengan otro resultado que el de entorpecer el libre ejercicio en el comercio a que se dedique una persona, este entorpecimiento no basta para juzgar que son anticonstitucionales, si se demuestra que sus disposiciones persiguen el fin de mejorar el bienestar colectivo."*  
(Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Segunda Sala, Tomo LIV, página 1162)."

**"LIBERTAD DE TRABAJO.**

*Del análisis del artículo 4o. constitucional, se advierte que el Constituyente no consagra una libertad absoluta, sino limitada a las actividades lícitas, debiendo entenderse por éstas, las permitidas por la ley; pero si bien el legislador puede vedar el ejercicio de ciertas actividades, debe hacerlo en una forma racional y legítima, obligado por exigencias sociales de carácter urgente e inaplazable, o para reprimir actividades contrarias a la moral, o a las buenas costumbres."*  
(Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Segunda Sala, Tomo LXI, página 4025)."

"Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XVIII, Agosto de 2003

Tesis: XIX.5o.6 A

Página: 1746

**ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA. EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN XII, DE LA LEY REGLAMENTARIA RELATIVA VIOLA LAS GARANTÍAS DE IGUALDAD Y LIBERTAD DE TRABAJO CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 1o. Y 5o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AL EXIGIR MAYORES REQUISITOS QUE A OTROS CON IGUAL ACTIVIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS).**

*El artículo 25, fracción XII, de la mencionada ley, al disponer que los establecimientos cuyo giro consista en la enajenación, almacenamiento, distribución y consumo de bebidas alcohólicas, con excepción de restaurantes, casinos, círculos o clubes sociales, bares de hoteles, discotecas, restaurante-bar y supermercados, deben estar ubicados a una distancia fuera de un perímetro de doscientos metros de planteles educativos, centros de trabajo, hospitales, hospicios, asilos, etcétera, es violatorio de las garantías de igualdad y libertad de trabajo contenidas en los artículos 1o. y 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque exige de los establecimientos comerciales denominados abarrotes, mayores requisitos que a otros establecimientos con igual actividad (como el relativo a esa distancia perimetral), lo cual resulta atentatorio de la libertad de comercio, dado que el Pacto Federal otorga a todas las personas, sin distinción alguna, la prerrogativa de ejercer libremente el comercio, siempre y cuando sea lícito, sin más limitante que preservar el interés público y el orden social.*

(El énfasis es añadido)

Ahora bien, el Artículo 63 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas establece las atribuciones y obligaciones del Tesorero, entre las que se encuentran la de recaudar los impuestos y derechos, sin embargo, no se establece que en el cobro de estas

se afecte la libertad de comercio de mi poderdante apercibiéndolo de clausura o suspensión de sus actividades.

En tales condiciones, resulta evidente que se deja a mi poderdante en un total y absoluto estado de indefensión, por lo que, lo procedente conforme a Derecho es que esa se declare la nulidad de los actos impugnados, en razón de que vulnera el principio de legalidad, de conformidad con las disposiciones ya mencionadas.

#### VII. MEDIDA CAUTELAR (SUSPENSIÓN)

Con fundamento en los Artículos 131, 132 y demás aplicables de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, en virtud de que se surten en el caso particular los supuestos previstos en tales preceptos legales, y con la finalidad de **evitar que se causen perjuicios de imposible reparación a los derechos fundamentales de mi representada**, mi representada **SOLICITA LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS IMPUGNADOS, ASÍ COMO DE TODOS SUS EFECTOS Y CONSECUENCIAS**, para el efecto de que toda vez que cumple a cabalidad con los requisitos planteados por la normatividad, **NO SE EFECTUÉ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN ALGUNO QUE PRETENDA REQUERIR DE PAGO LAS CONTRIBUCIONES EXIGIDAS POR EL TESORERO MUNICIPAL. EN TAL SENTIDO SE SOLICITE SE DECRETE LA MEDIDAS SUSPENSIONAL Y SE FIJE GARANTÍA PARA QUE LA MISMA SIGA SURTIENDO EFECTOS. ASÍ COMO PARA QUE LAS COSAS SE MANTENGAN EN EL ESTADO EN EL QUE ESTÁN Y SE PERMITA A MI REPRESENTADA CONTINUÉ REALIZANDO SUS ACTIVIDADES COMERCIALES PRIMORDIALES Y NO SE LE SUSPENDAN LAS MISMAS.**

La presente medida se solicita, toda vez que no se sigue perjuicio al interés social, toda vez que no se actualiza ningún supuesto de los previstos por la Ley en cita, además de que no se contravienen disposiciones de orden público, no se afectan derechos de terceros y en caso de no concederse se causarían a la sociedad actora daños y perjuicios de imposible reparación. Adicionalmente, tal y como quedó detallado en el capítulo de antecedentes del presente ocuro se acredita una clara **APARIENCIA DEL BUEN DERECHO**, pues el oficio impugnado vulnera flagrantemente el Principio Fundamental de Legalidad.

En efecto, lejos de causarse perjuicio al interés social o de contravenirse disposiciones de orden público, con la presente medida se estaría dando certeza y seguridad jurídica a las instituciones del Estado, además de que se estará cumpliendo con un imperativo legal que establece la obligación de las autoridades administrativas de fundar y motivar su actuación, máxime cuando con tal actuación se afectan los derechos de los particulares.

Para sustentar las anteriores afirmaciones, a continuación se transcriben, por economía procesal, los rubros diversas tesis jurisprudenciales, aplicables por analogía, sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resultan aplicables al caso concreto:

Época: Novena Época  
Registro: 917974  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Apéndice 2000  
Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN  
Materia(s): Común  
Tesis: 440  
Página: 374

**SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTICULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.-**

La suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensiva deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violación alegada no sólo comprende el concepto de violación aducido por el quejoso sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. En todo caso dicho análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión.

**VIII. PRUEBAS**

**1. DOCUMENTAL PÚBLICA**, consistente en la copia certificada del instrumento notarial, con el que se acredita el carácter de apoderado del suscrito, mismo que en **copia certificada** se acompaña al presente recurso como **ANEXO "1"** y se relaciona con todas y cada una de las consideraciones de hecho y de derecho del presente escrito inicial.

**2. DOCUMENTAL PÚBLICA**, consistente en copia simple del oficio número MHC/TES/06-A/2019, de fecha 13 de mayo de 2019 emitido por el Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Huixtla, Chiapas, en el cual se exige a mi representada el cobro de derechos de

funcionamiento para el ejercicio 2019, misma que constituye el acto impugnado en el presente ocurso.

Se acompaña al presente ocurso como **ANEXO "2"** y se relaciona con todas y cada una de las consideraciones de hecho y de derecho del presente escrito inicial.

**2. DOCUMENTAL PÚBLICA**, consistente en copia simple del oficio número 005/2019, de fecha 1º de abril de 2019 emitido por el Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Huixtla, Chiapas, en el que se lo otorgó a mi representada el término de 72 horas para cubrir los importes de los Derechos de Funcionamiento Municipales, misma que constituye el acto impugnado en el presente ocurso.

Se acompaña al presente ocurso como **ANEXO "3"** y se relaciona con todas y cada una de las consideraciones de hecho y de derecho del presente escrito inicial.

**3. DOCUMENTAL PÚBLICA**, consistente en la impresión de la cédula de identificación fiscal de **NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.**, expedida por el Servicio de Administración Tributaria, en la que se aprecia que la actividad dada de alta es "Comercio al por menor en tiendas departamentales" que se acompaña como **ANEXO "4"**.

**4. PRESUNCIONAL**, en su doble aspecto, legal y humana, en todo aquello en que beneficie a la sociedad a la que represento.

**5. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES**, en todo aquello en que beneficie la sociedad a la que represento.

Por lo antes expuesto,

**A ESE H. TRIBUNAL**, respetuosamente solicito se sirva:

**PRIMERO.-** Tenerme por presentado en los términos del presente escrito, con la personalidad que ostento, interponiendo juicio en contra del acto de autoridad precisado en el cuerpo del presente ocurso.

**SEGUNDO.-** Tener por señalado como domicilio para recibir notificaciones el mencionado en el proemio de este ocurso, y por autorizadas para los efectos que se señalan a las personas señaladas en el mismo.

**TERCERO.-** Tener por exhibidos los documentos adjuntos a esta demanda y ofrecidas las probanzas relacionadas en este ocurso, proveyendo lo necesario para su desahogo.

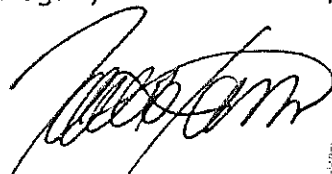
**CUARTO.-** Previos los trámites de Ley, declarar la nulidad del acto administrativo impugnado, para los efectos solicitados en la presente demanda.

**QUINTO.-** Conceder la medida cautelar (suspensión) en los términos precisados.



**ÚLTIMO.-** Acordar favorablemente lo solicitado en el ocurso de cuenta y en los puntos petitorios previos.

En el lugar y a la fecha de su presentación.



98 ELEMENTOS ELIMINADOS. Justificación: Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada legalmente como confidencial por ser vinculable a personas identificadas y/o identificables, asimismo, por encuadrar en los supuestos normativos previstos en la Constitución Política Federal y Local; así como los numerales: 120, 121, 129, fracción III, 139, y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas; 4 fracción II, 12 y 13 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas.

Fecha de clasificación: a los 12 días del mes de agosto del año 2024 .